

EDITORIAL

Una de las razones que motivan e impulsan la aparición de *Dialéctica*, lo dijimos desde el primer número, es la defensa de la Universidad, de nuestra Universidad, y de la Universidad pública en México. Se trata de una preocupación constante que ha generado numerosas reflexiones críticas y propositivas desde las páginas de nuestra revista. Ello no ha sido un tema entre tantos, sino una convicción: el desarrollo y avance cultural, democrático y social del país tiene en la educación pública un pivote fundamental. Su defensa ha sido, y es, una voluntad compartida por lo mejor de nuestra intelectualidad, nuestros maestros y, en especial, por nuestra juventud estudiantil.

Han cambiado, sin duda, las condiciones políticas. Los enfrentamientos continuos con los gobiernos federales y estatales casi han desaparecido. Las manifestaciones rituales para facilitar las negociaciones por la obtención de mayor subsidio son, con salvas excepciones, inexistentes.

Los salarios se reciben por lo general de manera civilizada, adentrados, en fin, en la modernización globalizadora. Sin embargo, se han establecido una serie de instrumentos despersonalizadores con el pretexto de la excelencia y la competitividad, que dejan casi sin capacidad de respuesta a las instituciones de educación superior, supeditando a éstas a un sinnúmero de exigencias burocrático-administrativas, donde el profesor-investigador tiene que amoldarse por el solo instinto de supervivencia. En realidad, el proyecto personal de superación y de investigación debe necesariamente adecuarse a exigencias diseñadas por etéreas "autoridades sexenales" que, según su criterio personal, son indispensables para la construcción de un "modelo ideal" que, como tal, ni siquiera ellas conocen, sino que son copia y/o aplicación impuesta desde el exterior, conforme a lo que tan genéricamente se llama política neoliberal.

Si desaparecen los diseños personalizados en la conformación de los cuadros docentes y sobre todo de los proyectos de investigación, innegablemente desaparecerán el perfil específico y las características particulares de cada una de las universidades.

El resultado: la homogeneidad de todo y de nada. Hay, sin duda alguna, un sector que se ha negado a tal generalización, en el área del conocimiento, pero que cada vez va perdiendo mayor terreno en la práctica, es el sector de las humanidades. Se va perdiendo la característica individualidad, a pesar de su criticidad, por la simple y sencilla razón de la sobrevivencia y por la soterrada competitividad por

una mejoría en la participación salarial. Indudablemente, en las últimas décadas, los aumentos salariales reales han sido ridículos, sin embargo, el paliativo de los "estímulos", las "becas", los "proyectos etiquetados", etcétera, han propiciado que ese poder adquisitivo mermado se vea aparentemente normal y "suficiente" para la solución de las necesidades inmediatas e indispensables, pero niega la posibilidad de prevención de un futuro y un patrimonio mejor.

La lejana esperanza de poder contar con una jubilación aceptable, por la que se luchó en los finales de las décadas 70 y 80, se ve seria y realmente amenazada por un gobierno incompetente e incapaz de pensar en un proyecto con dimensiones de justicia social.

Las recientes modificaciones a la Ley del Seguro Social y su sistema de pensiones hablan claramente de esta falta de visión y comprensión. La salud y la educación no tienen cabida en la agenda de un gobierno alentado por el cambio que el pueblo requería, pero que necesariamente estaba llamado a su claudicación por sus propios principios y orígenes. Está por demás hacer mención del cuarto informe de gobierno del actual Presidente de la República, para darse cuenta de la inexistencia de la educación superior y de la salud entre las prioridades de un gobierno originado en las élites empresariales y en el conservadurismo católico.

Sin duda alguna, urge la solución a los problemas de extrema pobreza que afligen a un país, como se dice, en vías de desarrollo; pero no puede ser a costa de la salud y de la educación de todos, y menos de la educación superior y de los proyectos de investigación que ésta incluye. La visión social de los legisladores de las décadas 40 y 50 no puede ser ignorada y echada a la borda por soluciones coyunturales y mediatistas, para resolver los efectos provocados por la ineficiencia y corrupción de dirigentes, sean éstos institucionales o sindicalistas.

Como lo hemos subrayado en otras ocasiones, la educación superior es un factor fundamental en el progreso de un pueblo y en la conservación de sus valores y de su cultura.